

Silvia Dutrénit Bielous, 1994, *El maremoto militar y el archipiélago partidario. Testimonios para la historia reciente de los partidos políticos uruguayos*, Montevideo, Instituto Mora y Ediciones de Ciencias Sociales, 326 pp.

LOS AVATARES DE LA HISTORIA POLÍTICA dejan no sólo experiencias tristes o afortunadas, sino también un temario de estudios académicos en constante renovación. Pasada la época de las dictaduras que durante los años setenta llegaron a dominar a la mayoría de los países latinoamericanos, a fines de los ochenta se abrió la página de los estudios sobre la transición a la democracia. La creciente valorización de la democracia unida a sucesos posteriores en diversas partes del mundo, contribuyeron a que este tema haya seguido atrayendo el interés de investigadores, profesionales de la política y público en general hasta el día de hoy.

La obra de Silvia Dutrénit que reseñamos se inscribe en dicha corriente. Se refiere a un caso preciso, el de Uruguay en la época del régimen dictatorial que transcurre de 1973 a 1985, y apunta a una cuestión específica, la de la revitalización de los partidos políticos proscritos o congelados por la dictadura, que se llevó a cabo a partir de una tortuosa y difícil negociación entre políticos y militares que tomó muchos años. El libro se compone de un extenso artículo introductorio escrito por la compiladora, seguido de dieciséis entrevistas a otros tantos líderes de los principales partidos políticos uruguayos, o sea de los dos partidos llamados “tradicionales” (el Partido Colorado y el Partido Nacional), más las fuerzas de izquierda en su mayoría reunidas por el Frente Amplio. La autora identifica en la introducción tres etapas de esta historia, ordenamiento que ha de servir al lector para desenvolverse en la comprensión de las entrevistas que siguen. Estos lapsos se extienden aproximadamente de 1973 a 1976 —instalación y consolidación de la dictadura—, de 1976 a 1980 —pleno dominio militar— y de 1980 a 1985 —negociación del retorno a la democracia.

Como el título indica, el libro se escribe como un capítulo especial en la historia de los partidos uruguayos, lo que no es un dato menor. Para quien conozca aunque sea mínimamente la trayectoria de este país, es sabido que su sistema político se ha estructurado en torno a la actividad preponderante de los partidos. Por un lado, ha habido una tendencia poco frecuente en América Latina a la persistencia de los dos partidos más antiguos (los mencionados Colorado y Nacional) que se remontan al periodo inmediatamente posterior a la Independencia; por otro lado, el sistema ha sido lo suficientemente flexible como para abrirse a fuerzas partidarias —sobre todo la izquierda— surgidas posteriormente, y que al día de hoy ostentan en el espectro político un peso comparable al de las organizaciones tradicionales. Este equilibrio tripartito de constitución reciente comenzó precisamente a fraguar como resultado de los sucesos de que trata el libro.

Es éste por tanto un testimonio acerca de la reconstitución del poder secular de los partidos en contradicción más o menos abierta con un régimen militar. En

tal circunstancia, la centralidad que van recobrando paso a paso los partidos no es casual, porque dadas las violentas exclusiones que la dictadura había producido en su relación con distintos actores del sistema político, eran en principio los dos partidos tradicionales aquellos que —aun tímidamente— podían reivindicar una legitimidad a nivel nacional, tanto de cara a los militares como al resto de la sociedad. Por otra parte, la revitalización lenta pero segura de los partidos servía para dar cauce a otros dos fenómenos necesariamente asociados a un renacimiento de la democracia. Por un lado, el trabajoso debate sobre las normas paraconstitucionales que habrían de dar forma a las instituciones de la transición, luego de que el resultado negativo del plebiscito de 1980 obstruyó el intento militar de instalar por plazo indefinido unaseudodemocracia. Por otro lado, la recuperación de una élite política que en los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado de 1973 había sido presa de una decadencia que en algún momento pareció irreversible. El punto es importante y merece profundización, pues una élite política es algo distinto de la organización partidaria que la aloja y en América Latina son escasos los estudios empíricos e históricos sobre élites políticas.

Pero no obstante esta revitalización de lo tradicional, la transición uruguaya finalmente se hace por una combinación más amplia de fuerzas, dado que luego de años de conversaciones se llega también a la rehabilitación —aceptada por los mismos militares— de aquella fuerza política a la que éstos habían perseguido buscando exterminar: la izquierda. El bloqueo producido en el momento terminal de las negociaciones, cuando uno de los partidos tradicionales, el Nacional, rompe relaciones con el gobierno militar, sólo pudo ser salvado mediante una inclusión de la izquierda en las tratativas, que en acuerdo con el otro partido tradicional, el Colorado, y con los representantes de la dictadura, llega en 1984 a lo que se llamó el Pacto del Club Naval, que dio pie al proceso de apertura propiamente dicho.

Este extraño movimiento doble, por el que una fuerza moderada se margina y otra perseguida y sospechosa de subversión se integra a un proceso en un momento muy polémico y cuestionado de negociación en la cúpula, es altamente simbólico. Por un lado es indicativo de esa tendencia a la tripartición del sistema político uruguayo que sucede al bipartidismo que había sido la norma por más de cien años. Por otro lado, la combinación de oposición con colaboración que inaugura la izquierda en esta coyuntura es muestra de uno de los mecanismos que han sido habituales en la mayoría de los procesos de transición a la democracia que se han abierto en el mundo desde entonces y que han premiado a aquellas fuerzas que han sabido jugar la carta de la cooperación, sin perder autonomía ni incurrir en la ruptura. Es claro en el caso que estudiamos, que pese a lo discutible que fue la participación de la izquierda en el Pacto del Club Naval, ésta se vio en lo sucesivo recompensada por caudales electorales crecientes, mientras que el Partido Nacional, que apostara entonces a la intransigencia basada en principios, pronto debió variar su táctica para acordar con el Partido Colorado (sucesor de los militares en el gobierno) un pacto de gobernabilidad que le obligó a apoyar asuntos tan críticos como la aprobación de la amnistía a los representantes de la dictadura en 1986.

Pero lo anterior sólo pone en relieve lo más sustancial y de largo plazo (así como también lo menos agradable) en la regeneración de un régimen político democrático. En una perspectiva más coyuntural y de detalle, las entrevistas de este libro dicen también mucho acerca de lo que es otro ítem digno de profundización: el peculiar sistema político de las dictaduras castrenses. Por más que éstas llegaran a insinuar a veces el final definitivo de la política civil y el inicio del milenio militar, la prohibición de toda o casi toda forma de acción colectiva y la ilegalidad de toda acción que no se basara en el trato directo entre individuo y Estado (ideología típicamente liberal extrañamente enarbolada por regímenes antidemocráticos), de hecho, por razones prácticas, debían reconocer en la sombra a ciertos actores colectivos con los cuales necesitaban acordar. Aunque la negociación se llevara a cabo a menudo desde posiciones de fuerza y bajo drásticas amenazas para el débil, no hay duda de que favorecía una dinámica que el asociarse con circunstancias como las del plebiscito de 1980 que le permitieron expandirse, abriría un camino firme a la apertura. Este tipo de sistema político en la sombra, o “mercado negro” de la política, se utilizaba para tratar con actores reconocidos y nunca proscritos como las cúpulas empresariales, pero también para intentar (infructuosamente en general) establecer interlocutores sindicales confiables para la dictadura. También fue aprovechado, obviamente, por esos negociadores por excelencia que son los políticos tradicionales. Lo interesante de las entrevistas es que muestran como aun antes de que sucesos históricos como el del plebiscito abrieran a la antigua élite política la puerta grande de la negociación, ésta ya había logrado por iniciativa propia adelantar el proceso buscando —no sin esfuerzo— contactos informales con los militares más accesibles.

En este sentido, es interesante citar la opinión de uno de los principales líderes de un partido tradicional, acerca de los contendientes a los que se tenía que enfrentar. Distinguía entre militares “gorilas” y “políticos”, pero contra lo que podría pensarse, consideraba que los “gorilas” eran desde el punto de vista civil preferibles a los “políticos”, puesto que los primeros tenían la mentalidad de “un bombero anticomunista” sin muchas perspectivas estratégicas, que tarde o temprano se vería obligado a volver a los cuarteles. El “político” (también llamado “peruanista”, por identificación con el gobierno militar peruano de los años setenta) podía ser en cambio alguien más accesible aparentemente, pero también aquel en quien más podía alentar la ambición de forjar un sistema autoritario duradero y verdaderamente alternativo al poder civil.

Sin embargo, en el caso de Uruguay, más allá de algunos escarceos que no prosperaron posiblemente debido a discrepancias en el seno de la cúpula militar, el único ensayo —también fallido— de sustitución radical del régimen tradicional de partidos provino no de los militares sino del ala civil de la dictadura, encabezada por el presidente Juan María Bordaberry (1972-1976). Bordaberry, que como mandatario electo había acompañado el golpe de Estado de 1973, pertenecía a una camarilla de extrema derecha que en 1976 intentó decretar la erradicación de los partidos y la instauración de una constitución de corte corporativo. Pero fue obligado a renunciar por los militares que hasta entonces habían sido sus alia-

dos, y que en ese mismo acto proclamaron su voluntad de respetar la supervivencia de unos partidos a los que sin embargo mantenían desactivados por la fuerza.

Esta ambigüedad castrense es clave para entender el desenvolvimiento del proceso político durante la dictadura y la posterior transición a la democracia. Irónicamente, los primeros “transicionistas” fueron los militares que —al igual que en otros países de América Latina— al operar como “bomberos anticomunistas”, se proclamaron como gobierno provisorio tendente en última instancia a la restauración de la democracia. Las propuestas que expresaron más auténticamente sus ambiciones —como el proyecto constitucional rechazado por la ciudadanía en 1980—, muestran que su concepto de “democracia” estaba muy lejos de lo que solemos entender por tal, pero el hecho de que no cuestionaran verbalmente el principio democrático, unido al fracaso de sus intentos de institucionalización alternativa, dejaron abierta la puerta a las demandas de normalización que serían capitalizadas por parte de la vieja clase política aliada en última instancia con la izquierda.

Aunque los entrevistados hablan poco de ello, en esta sucesión de eventos fue sin duda importante el papel del gobierno de Estados Unidos. Así como éste había apoyado o al menos tolerado la brutal represión de la izquierda y los sindicatos durante los años sesenta y setenta, fue más dubitativo a la hora de la entronización del régimen militar, y menos aún hubiera estado dispuesto a avalar una desautorización *sine die* del principio de la democracia. Y por más que no todos los altos oficiales uruguayos fueran abiertos simpatizantes del gobierno estadounidense, todos sabían de quién dependía el abasto de créditos y pertrechos para las fuerzas armadas y, más sucintamente, quién ostentaba la fuerza en el hemisferio occidental y en el llamado “mundo libre”.

También las embajadas de los principales países de Europa occidental jugaron un papel considerable en la transición, sobre todo al propiciar los contactos informales entre políticos tradicionales y militares.

Unidos todos estos elementos —indecisiones castrenses, fracaso de la derecha civil, ambivalentes presiones de los Estados Unidos y hábiles maniobras tácticas de la vieja élite política—, tenemos algunos de los ingredientes que hicieron posible la transición. La imagen que dejan las narraciones personales es que los mecanismos concretos de la misma fueron principalmente tres. En primer lugar, tareas que podríamos calificar de simple sobrevivencia política, buscando mantener el mero contacto personal entre líderes estrechamente vigilados por la dictadura. En segundo lugar, tareas de contacto entre políticos civiles y oficiales de alto rango relativamente más accesibles. La fortuna de los políticos civiles (y de transición en general) radicó en la capacidad de ambos tipos de actores de identificarse, localizarse y entablar un curso de conversaciones que comenzó en el nivel más casual posible para terminar, al cabo de los años, en la formalización de un pacto con valor constitucional.

En tercer lugar, el aprendizaje por parte de los actores civiles y militares del principio de que el sistema de negociaciones más válido por sus resultados era aquel que se sostenía entre telones, sin registros para la posteridad ni mayor difusión al público, en lugar del que se realizara a la vista de todos que, si bien más

conforme con las reglas del juego democrático, al producirse en un contexto no democrático llevaba simplemente a un boxeo de formas y de sombras sin mayores efectos del punto de vista del logro de los objetivos de terminación del régimen autoritario.

Un último punto tiene que ver con el papel de la ciudadanía en general o, si se quiere, de las masas. Sabido es que en el periodo final de la dictadura la presión popular en la calle, si bien pacífica en los métodos y moderada en el lenguaje, fue creciente. Más de uno de los políticos tradicionales entrevistados reconoce que la oposición masiva, más reducida en el momento de la instalación de la dictadura de lo que la tradición de izquierda quiere reconocer, fue sin embargo aumentando en la medida en que el régimen autoritario se extendía en el tiempo. Al final, el Pacto del Club Naval parece ser apremiado por la necesidad de evitar un crecimiento de la protesta callejera que llevara a una interrupción del proceso de apertura o a un estallido violento que hasta entonces había sido evitado. Ello pesó también posiblemente en la aceptación por parte de los militares de la inclusión de la odiada izquierda en la mesa de discusión. De modo que si bien las enseñanzas del proceso de transición muestran que ésta fue en gran medida y efectivamente un resultado de decisiones de cúpula, no puede dejarse de lado el hecho de que el peso de los políticos civiles, conservadores o de izquierda, radicaba también en su capacidad real o hipotética de activar o neutralizar fuerzas masivas de reserva, estructuradas a lo largo de décadas de existencia de un sistema político moderno.

Gonzalo Varela